

de este juicio á 23 de Noviembre próximo pasado por el juez de Distrito de Sinaloa, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Elorza y Mendía, contra el acto del administrador de la aduana terrestre de Mazatlan, por el que se niega á recibirles en pago de los derechos que causaron trescientas cargas de harina, ciento veintiocho bultos jabon y cien tercios arroz, la suma de mil cincuenta y siete pesos, catorce centavos en moneda de cobre.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 14 de Enero de 1875.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. J. V. Sandoval, Wenceslao Iberri y otros, contra el cobro que les hace el administrador de la aduana de rentas de Guaymas, de las cuotas que les han sido asignadas para cubrir la contribucion extraordinaria decretada por la legislatura del Estado en 24 de Junio último.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal no considera legal esta queja, ni mucho ménos fundado el amparo que solicitan las personas que la suscriben, por las cuotas que respectivamente se les ha impuesto por el decreto de la Legislatura del Estado de 23 del próximo pasado, reglamentado por el Ejecutivo del mismo en 25 del propio mes. Es inconcusa la facultad que tienen las legislaturas de los Estados para establecer contribuciones con el objeto de cubrir los gastos de los mismos, como se expresa en la fraccion IX del art. 67 de la Constitucion particular del Estado de 13 de Febrero de 1861, como la obligacion de los sonorenses para contribuir á esos gastos, frac. II. art. 33 de la citada Constitucion; y por lo mismo, al hacerse efectiva la cuota que se les ha señalado, no creo que se les haya violado ninguna de las garantías que invocan los quejosos en cuanto á sus intereses; no convenciendo las razones que exponen de falta de equidad ó proporcion, porque esto es muy difícil de probarse y mucho ménos que el Juez pueda calificarlo, quizá por falta de conocimientos oficiales en el censo de la poblacion y en el valor de las fincas rústicas y urbanas ó industrias que puedan tener los habitantes de este Estado. El Ejecutivo al dar el reglamento de la referida ley, puede haber procedido con mejores datos distribuyendo en cada uno de los distritos el cupo que le



correspondia para el derrame de los \$15,000. En cuanto á la cantidad que se les ha fijado por el referido decreto, para ser contribuyente de que excedian de 2,000 pesos, parece que su mente fué su mas fácil realizacion para cubrir de pronto algunas exigencias de su escaso erario, y favorecer en dicho modo á la clase proletaria. Por lo mismo, al proceder en esos términos, lo ha hecho en virtud de un derecho reconocido, sin que por esto puedan considerarse agravados los interesados, á los que si se les protegiera, daria por resultado que dejarian de ser contribuyentes y pravar así á la legislatura de imponer tales impuestos, á los que tienen facultad de hacerlo tanto por la Constitucion general, como por la del Estado. Por lo que concluye pidiendo se decretase que no ha lugar al amparo que se solicita.

Guaymas, Agosto 1º de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Setiembre 18 de 1874.—*José Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Setiembre 17 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por los Sres. D. José V. Sandoval, Wenceslao Iberri, Wenceslao Loacsa, Agustin Bustamante, Francisco Irigoyen, Rafael Escobosa, Juan Basczábal, José Iberri, Torcuato de la Huerta, José de la Cruz, José Esprin, Ireneo Michel, Miguel Carrillo, Francisco A. Aguilar, Adolfo Bullo, Antonio Canale, Vicente Ortiz, Y. M. Lelevier, José Somellera, Pedro Prieto, Isaac Coppe, G. Barton, Leopoldo Zier, Lorenzo Brido, P. B. Chiscm, Alfonso Conindreau, Enrique Zuñs, Hugo Martens, y las Sras. D^{as} Dolores R. de Hlazard, Felipa Almada, Clara de Feliz y Emilia de Fourcade, en que se quejan del acto del administrador de rentas de este puerto, que les exige el pago de la cuota que por contribucion extraordinaria les corresponde en virtud de la ley del

Estado fecha 24 de Junio último, por considerar que con él se violan en sus personas las garantías otorgadas por los arts. 4, 13 y 16 de la Constitucion federal, á causa de no estar la contribucion extraordinaria de que se trata, repartida proporcional y equitativamente entre los diversos distritos del Estado, y de no gravarse sino los capitales que pasen de 2,000 pesos, con lo cual se infrinje el precepto contenido en los arts. 31 y 33 de la propia Constitucion. Visto lo probado y alegado por los quejosos; lo expuesto por el ciudadano promotor fiscal; lo dictaminado por el C. Lic. Francisco G. Flores, y todo lo demas que de autos consta y ver convino:

Considerando: 1º: Que por las pruebas rendidas por los quejosos, aparece comprobado, que en la ley de 15 de Diciembre de 1873, que estableció una contribucion directa ordinaria sobre capitales, industrias, rentas, sueldos y profesiones, el distrito de Guaymas está reputado igual en riqueza al distrito de Alamos, é inferior al de Hermosillo: que en la contribucion extraordinaria de que se quejan, el distrito de Guaymas está cuotizado como superior en riqueza á los distritos de Hermosillo y Alamos, y que en las contribuciones directas ordinarias sobre capitales, anteriormente decretadas desde el restablecimiento del orden constitucional, la cantidad menor que se ha fijado para el cobro del impuesto, es la de 500 pesos.

2º: Que según el art. 16 de la Constitucion federal, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; de donde resulta, que la accion de la autoridad sobre las personas y las propiedades, pueda ser arbitraria y constituir una violacion de garantías, por dos motivos: por falta de competencia, ó porque su procedimiento no se apoye en un fundamento legal, esto es, que obre fuera de los límites

que le marcan las leyes en virtud de las que ejerce sus funciones.

3º: Que en materia de impuestos es incontrovertible que cada habitante no está obligado á contribuir para los gastos públicos, sino en proporcion de sus recursos; según el precepto citado de la Constitución federal, á que han debido normarse las constituciones de los Estados; y como las obligaciones y derechos son correlativos, es claro que el legislador no tiene derecho de exigir á cada habitante para los gastos públicos, sino la cuota proporcional que le corresponde.

4º: Que siendo notorio y evidente por los datos ministrados, que la legislatura de Sonora en la contribucion extraordinaria decretada el 24 de Junio último, exige á los habitantes del distrito de Guaymas mayor cuota que la que les corresponde, según su relacion de riqueza con los demas distritos, fijada por la misma autoridad para el año corriente; es claro é incontestable que la legislatura de Sonora al obrar así, no funda su procedimiento en una causa legal, y viola por lo mismo la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitución federal.

5º: Que una vez que la autoridad, apoyándose en los datos administrativos que ha podido recojer, fija las bases para el cobro del impuesto directo en un año fiscal, como lo ha hecho la legislatura de Sonora en su ley de 15 de Diciembre de 1873, no le es permitido alterarlas en las contribuciones complementarias ó extraordinarias que se vean en la necesidad de imponer, porque de otra manera, seria necesario reconocer en el legislador el derecho de decretar indirectamente, por medio de impuestos, expoliaciones, multas excesivas ó confiscaciones; puesto que una vez fuera de la regla, no habria fundamento para asignarle límite alguno; y tal consecuencia es absurda y en contradiccion con los arts. 22 y 27 de la Constitución.

6º: Que se puede decir, que la garantía fundamental del sistema democrático que

nos rige, y que se halla consignada en el art. 13 de la Constitución, es la igualdad de derechos y obligaciones ante la autoridad; y siendo eso así, no puede el legislador al decretar impuestos, como lo ha hecho la legislatura de Sonora, gravar á unos y exonerar á otros, ó pedir á determinadas personas mayor cuota que las que les corresponde, sin violar esa garantía primordial de que se trata.

7º: Que el sistema de decretar contribuciones extraordinarias, basadas en cálculos arbitrarios y que gravan á determinadas personas, es un resto de la situacion anárquica en que hemos vivido durante las guerras civiles en que hemos estado envueltos, y debe desaparecer en este período en que funcionan regularmente las instituciones, porque pugna con los principios mas fundamentales de justicia y de igualdad de derechos y obligaciones, en que está basada la Constitución que nos rige; y

8º: Que siendo evidente que tales contribuciones extraordinarias son una arbitrariedad y un acto fuera de la ley; á los tribunales federales toca impedir que se ejecuten en las personas que se quejan del agravio inferido, por ser eso el único remedio que la Constitución establece contra semejantes abusos legislativos. Por tales consideraciones y fundamentos, y apoyado en la ley de 20 de Enero de 1869 y en los arts. 101 y 102 de la Constitución, he debido declarar y declaro: Que la Justicia de la Union ampara y protege á las personas arriba mencionadas, contra el acto del ciudadano administrador de rentas de este puerto, por el cual les exige el pago de la cuota que les ha sido asignada por contribucion extraordinaria, en virtud de la ley del Estado de Sonora, fecha 24 de Junio último.

Notifíquese á las partes esta resolución, sáquense dos copias de ella, una para que se publique en el periódico oficial del Estado y otra en el *Semanario Judicial*, remitiéndose estos autos á la Suprema Corte de

Justicia para los efectos de la ley. Así el C. M. Campillo, Juez 2º suplente de Distrito, lo decretó y firmó con los de su asistencia.—*M. Campillo.—A.—P. del Rincon.—A. J. López.*

Es copia que certifico. Guaymas, Setiembre 18 de 1874.—*Campillo.—A.—P. del Rincon.—A.—José López.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 9 de 1874.

Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Sonora por los Sres. J. V. Sandoval, Wenceslao Iberri, M. Loaeza, Agustín Bustamante, Francisco Ingoyen, Rafael Escobosa, Juan Basozabal, José Iberri, Torcuato de la Huerta, José de la Cruz, José Esprin, Ireneo Michel, Miguel Carrillo, Francisco A. Aguilar, Adolfo Bulle, Antonio Canale, Vicente Ortiz, J. M. Lelevier, José Somellera, Pedro Prieto, Isaac Coppel, G. Barton, Leopoldo Sier, Lorenzo Boido, P. B. Chisserr, Alfonso Coindreau, Enrique Zains, Hugo Martens, y las Sras. Dª Dolores R. de Hazard, Felipa Almada, Clara de Feliz y Emilia de Fourcade, contra el cobro que les hace el administrador de rentas de Guaymas, de las cuotas que los han sido asignadas para cubrir la contribucion extraordinaria decretada por la legislatura del Estado en 24 de Junio último, por ser contrarias las bases establecidas para la repartición de ese impuesto, á las prescripciones de los arts. 31 frac. 3º y 33 de la Constitución federal, y en consecuencia, atentatorias á los derechos individuales que garantizan los arts. 4º, 13 y 16 del mismo Código; y

Considerando que las infracciones á la Constitución se hacen consistir:

1º: En que la ley que establece la contribucion extraordinaria, señala al Distrito de Guaymas una cuota mayor que á los de Alamos y Hermosillo, no obstante que por las leyes anteriores relativas á la materia,

TOMO VII.—PARTE II.

se ha considerado al primero de estos distritos como inferior en riqueza á los otros dos, ó cuando mas, igual á uno de ellos; sin que justifique esa variación el cambio de las circunstancias respectivas de los tres Distritos, pues ninguno ha habido; y que por lo mismo, la cuota señalada á Guaymas, no es ni proporcional ni equitativa, contra lo dispuesto en el art. 31 constitucional.

2º: Que la misma ley exceptúa del pago de la contribucion, á los capitales, giros é industrias que representen un valor de.... 2,000 pesos ó menor, siendo así que las contribuciones ordinarias gravan á los capitales desde 600 pesos en adelante, por lo que esa exención no solo es contraria en lo absoluto á la igualdad de derechos y obligaciones que establecen los arts. 13 y 31 del pacto federal, sino que tambien lo es por la diferencia que establece entre los impuestos ordinarios y la contribucion extraordinaria.

3º: Que alega igualmente, que el nuevo gravámen no es equitativo, en razon de que conforme á la Constitución particular del Estado, no pueden establecerse mas contribuciones que las necesarias para cubrir los gastos del mismo Estado, y la parte que le corresponde de los de la federacion, y que la suma que representa en su total el nuevo impuesto, excede y con mucho á la que exigen esos gastos.

Considerando, en cuanto al primer punto: que la mayor ó menor inexactitud con que la legislatura del Estado de Sonora hubiera estimado la riqueza respectiva de los tres distritos mencionados, no puede motivar por sí sola la concesion del amparo de la justicia federal, en virtud de que esa apreciacion por la misma naturaleza de las cosas, tiene que ser conjetural y solo aproximada; que por otra parte, la simple circunstancia de haberse considerado en ocasiones anteriores al Distrito de Guaymas, en una categoría inferior á los de Alamos y Hermosillo con relacion á su riqueza respectiva, nada prueba en contra de la nueva graduacion,

30.

supuesto que no se ha justificado que la antigua fuera la acertada, ni tampoco, aunque se alega, que las circunstancias sean las mismas.

Considerando con respecto al segundo punto: que el hecho de haberse eximido del impuesto á los capitales, giros, industrias, etc. que representen un valor de 2,000 pesos ó menor, no demuestra por sí solo que las personas sobre las cuales recae el nuevo gravámen, hayan quedado sujetas en lo de adelante á contribuir para los gastos públicos con una suma mayor de la que debería corresponderles, observando una exacta proporción entre todos los habitantes del Estado; pues el sistema de contribuciones que existe en Sonora, puede ser de tal especie, que haya sido necesario precisamente para guardar la proporción debida, exceptuar de la contribución á los individuos que se consideraban estar ya demasiado gravados con el resto de las contribuciones. Que por otra parte, no pueden considerarse como un privilegio contrario á la igualdad de derechos y obligaciones que garantiza el art. 13 de la Carta fundamental, las excepciones que siempre contienen las leyes en favor de los impedidos y de las personas cuya pobreza no les permitiría cumplir con las prescripciones de la ley: así como que es una condición indispensable para que la recaudación de los impuestos que recaen sobre el capital, sus productos sea llana y expedita, tomar como punto de partida desde el cual deban comenzar á cansarse, los capitales que por su importancia no pueden ser ocultos fácilmente.

Considerando: que igualmente no puede ser materia de este recurso la cuestión de si el monto de la contribución extraordinaria es superior á la suma que representa la parte de egresos del Estado, para cubrir la cual fué establecida; y si la legislatura de Sonora ha infringido por este motivo la Constitución particular del Estado, pues las infracciones de esta especie solamente pueden dar lugar á los recursos establecidos

por la legislación local, siempre que, como sucede en el caso presente, no hubiere sido vulnerada al mismo tiempo la Carta fundamental de la República.

Por estas consideraciones y con apoyo de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal y 16 de la de 20 de Enero de 1869, se decreta:

Primero: se revoca la sentencia pronunciada por el Juez 2º suplente de Distrito de Guaymas, en 17 de Setiembre de este año, que declara haber lugar al amparo de la Justicia federal, en el presente caso.

Segundo: la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los quejosos contra el acto del ciudadano administrador de rentas de Guaymas, por el cual les exige el pago de la cuota que les ha sido asignada por contribución extraordinaria, en virtud de la ley del Estado de 24 de Junio último.

Tercero. se impone á los solicitantes una multa de \$ 100.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos en cuanto al primero y segundo punto, y por mayoría en cuanto al tercero, lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José M. Iglesias*—*M. Auza*—*Juan J de la Garza*—*José Arteaga*—*Ignacio Ramírez*—*Ignacio M. Altamirano*—*L. Velasquez*—*M. Zavala*—*José García Ramírez*.—Certifico: que el C. Ministro Manuel de Castañeda y Nájera intervino en la votación de este amparo, y que por haber fallecido antes de firmar la sentencia anterior, no aparece en ella su firma. México, Febrero 9 de 1875.—*Luis M. Aguilar*,—secretario.

Es copia que certifica.—México, Febrero 10 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.